

José Ramón URQUIJO "Poder municipal y conflictos sociales en el País Vasco".- En Tokiko historiaz ikerketak = Estudios de historia local.- Bilbao : Sociedad de Estudios Vascos = Eusko Ikaskuntza, 1987; p. 169-182.

## PODER MUNICIPAL Y CONFLICTOS SOCIALES EN EL PAÍS VASCO\*

JOSE RAMON DE URQUIJO Y GOITIA  
Centro de Estudios Históricos (CSIC)

No es necesario insistir en la importancia del municipio como eje de poder y de control del Antiguo Régimen, en especial en el País Vasco. Las autoridades municipales asumían generalmente funciones de control policíaco y de orden público. A pesar de ello, apenas ha sido estudiado, al contrario de lo que sucede con el municipio castellano (1).

### Generalidades.

El municipio vasco juega además el papel de instrumento de control en manos de las Diputaciones, tal como se puede observar en los conflictos que tuvo con el poder central.

Si bien se ha escrito muy poco sobre el régimen municipal vasco desde el punto de vista de la historia científica, existe bastante literatura acerca de la democracia vasca, que ha hecho trascender la idea de que el municipio vasco estaba regido por reglas democráticas (2).

Hay dos conceptos claves a la hora de analizar el fenómeno: concejo y vecindad. Con frecuencia en el primer caso se idealiza la función del concejo abierto, hasta convertirlo en una asamblea con poderes decisorios; en el segundo caso se proyecta la actual definición de vecino sobre una sociedad en la que el mismo nombre tenía distinto significado (3).

A menudo se ha confundido las funciones del concejo (concejo abierto, cruz parada, ayuntamiento general...) adjudicándole características activas. Sin embargo en numerosos casos dicha asamblea era simplemente el marco necesario para publicar el acto electoral. Así lo señala claramente la Diputación de Vizcaya cuando informa al Secretario de Gracia y Justicia en 1829: "Por elección en Concejo abierto se ha entendido tanto la verificada por los Ayuntamientos en sesión pública como la que hacen los vecinos presididos por su Ayuntamiento o por el Fiel" (4). Sin embargo, el caso primero era el más frecuente. El análisis de las elecciones parece reducir en la mayoría de los casos la función del Concejo a escuchar los nombramientos y señalar los impedimentos legales en que pudieran incurrir los candidatos.

Así en Lemóniz se elegían por votos cuatro electores y "éstos separándose del Ayuntamiento hacen la elección, la cual se publica en Concejo abierto"; más claro es el sentido restrictivo que queda reflejado en las actas electorales de Arrigorriaga: "En el Salón de la Casa Consistorial de esta Anteiglesia (cita 28 nombres) y otros vecinos y vocales del Ayuntamiento de esta Anteiglesia... Ejecutada la precedente elección se pasó al Cementerio de la parroquia de esta Anteiglesia, paraje acostumbrado, y en cruz parada se publicó...". Iguales testimonios se encuentran en otras elecciones de las Anteiglesias de Vizcaya (Basauri, Dima...) (5).

Pero el elemento restrictivo resultaba aún más importante si analizamos la composición del Concejo abierto. A menudo se habla de concejante como individuo con derecho a participar en el Concejo, como sinónimo de vecino; y casi siempre concejante equivale a propietario o millarista. Así lo señala la Gaceta oficial carlista en 1836 que al dar las normas para la realización de elecciones en su artículo 5.º decía: "...elegidos para el próximo año, bien sea por todos los vecinos, bien por los concejantes conocidos con el nombre de millaristas...ó (6).

Más claro aún resulta el testimonio de Miñano quien en la voz **Leiza** de su Diccionario, señala que hay "288 vecinos entre propietarios o concejantes e inquilinos" (7). En Meñaca los únicos que tienen derecho

a voto en su Ayuntamiento de cruz parada son los propietarios (8).

Por ello la principal tarea consiste en definir el concepto de vecino en el marco de las Ordenanzas de los municipios vascos. Frente a la acepción más usada actualmente de quien "habita con otros en un mismo barrio, casa o Pueblo", en el marco del Antiguo Régimen era también usual utilizarla para designar al "que tiene casa y hogar en un Pueblo, y contribuye en él en las cargas, u repartimientos, aunque actualmente no viva en él" (9).

Si bien la vecindad no va unida a la propiedad en algunos casos, en las Anteiglesias se va imponiendo a lo largo del siglo XVIII esta necesidad hasta configurar un conjunto de requisitos semejante a éste:

estar casado o tener 25 años.

demostrar nobleza en juicio contradictorio.

ser "millarista", "abonado", "arraigado"...

limpieza de sangre.

Un fenómeno similar se observa en Alava y Guipúzcoa. Así lo señala R. Ortiz de Zárate: "Los vecinos de cada aldea o población rural, forman un concejo. En algunos casos, se constituye entre dos pueblos inmediatos, cuando ambos son muy pequeños. Para ser vecino se necesita llenar los requisitos de las **ordenanzas concejiles**, y los que no los tienen se denominan **moradores**, y no gozan ni voz ni voto en los Concejos, ni pueden ejercer los empleos concejiles" (10).

En Alava las condiciones de vecindad presentaban el siguiente cuadro: estar viudo o casado; tener casa abierta de su propiedad, lo que generalmente excluía a los hijos que vivían con sus padres; presentar la información correspondiente sobre sus antecedentes; pagar los derechos de vecindad. Por supuesto que los requisitos para ocupar cargos eran aún más restrictivos.

Las Ordenanzas de la Universidad de Lezo, realizadas en 1833, ilustran el proceso de diferenciación social en Guipúzcoa. En ellas se señala que la condición de vecino debe concederse a quienes posean la "hidalguía formal litigada en contradictorio juicio", limpieza de sangre, "bienes raíces libres, radicantes en jurisdicción de esta Universidad, hasta la cantidad de 30.000 mrs. vn. (11).

Una protesta de los vecinos de Villafranca ilustra el hecho del sentido restrictivo de la reunión del Ayuntamiento general al que concurrían "todos los vecinos concejantes millaristas" (12). Es evidente el contrasentido de llamar Ayuntamiento general a una reunión de acceso restringido, o quizá más bien resulta ilustrativo del hecho de la "evolución" / "degeneración" de un término cuyo significado ha variado a través de los siglos.

Más explícita se mostraba la Diputación guipuzcoana en 1826 cuando en una exposición dirigida al Rey Fernando VII señalaba:

"En las elecciones de los oficios municipales intervienen los vecinos llamados concejantes que forman una parte pequeña del vecindario. Para ser vecino concejante se requiere tener la cualidad de nobleza ejecutoriada en juicio contradictorio por sí o sus ascendientes, poseer cierta cuantía de bienes raíces que señalan las respectivas ordenanzas de cada Pueblo y estar inscrito en la matrícula de vecinos concejantes, en que no todos suelen inscribirse aunque tengan ejecutoriada la nobleza, y posean bienes raíces por ser acto voluntario el de la inscripción o matrícula.

Estos vecinos concejantes reunidos con los capitulares forman un Cuerpo que se llama Ayuntamiento general, y en él se tratan y determinan los asuntos de alguna gravedad que ocurren en el Pueblo, y el Ayuntamiento particular que es el de sólo los Capitulares, despacha los negocios corrientes y ordinarios.

Este mismo Ayuntamiento general es el que hace las elecciones que precisamente deben recaer en los vecinos Concejantes, de manera que ninguno puede elegir, ni ser elegido ni entrar en Ayuntamiento sin ser vecino Concejante.

Se procede a la elección de los oficios municipales por medio de electores que salen en suerte de un cántaro, en que se ponen otras tantas cédulas como hay vecinos Concejantes con los nombres de cada uno de ellos, pero no entran en suerte los Capitulares salientes..." (13).

A continuación señala que son estos electores quienes eligen los cargos municipales, aunque en algunos pueblos la elección se hace a propuesta de los cargos salientes. Resulta curiosa la afirmación que hace la Diputación que indica que los Concejos de los pueblos guipuzcoanos carecen del sentido de la

popularidad de los castellanos "en donde tienen entrada todos los vecinos y moradores y son por lo mismo muy numerosos y populares". Como muestra final de la ausencia de popularidad señala que la proporción de concejantes es muy baja "pues aún en una Ciudad, cuya población se compone de 9 a 10 mil almas, no pasan de unos cincuenta los vecinos concejantes que se hallan en aptitud".

El caso navarro sirvió de modelo para sus provincias vecinas. El proceso de eliminación de lo que ellos calificaban de excesiva "popularidad" de las elecciones se inició en 1724. Las Cortes de 1794 eliminaron los Concejos en las poblaciones que poseían más de 100 vecinos, sustituyendo su órgano de gobierno por la llamada veintena, integrada por las autoridades presentes y las de años anteriores hasta completar el número indicado. Este proceso se aceleró aún más en 1817 cuando los pueblos compuestos por 80 vecinos pasaron a ser gobernados por las quincenas y los de más de 50 por las oncenas. El mismo año se fijaron las condiciones para ocupar los cargos que se pueden resumir en tres: tener 25 años, caso o hacienda raíz propia en el pueblo en el que se es elegido y saber leer y escribir salvo en los pueblos pequeños. Las últimas Cortes del reino de Navarra dieron un paso más en el sistema restrictivo al suprimir el derecho de las Merindades a reunirse por voluntad propia, hecho que había acontecido durante la guerra contra los franceses. Al mismo tiempo se fijaba el sistema de elección por el método insaculatorio y las condiciones de los electores: 25 años; buena conducta ("persona de buena vida y costumbres, no tener fama de blasfemo, borracho ni jugador y saber leer y escribir"); se señalaba la riqueza necesaria para ser elegido, de acuerdo con el cargo a ocupar... (14).

Resulta interesante analizar las expresiones utilizadas en las convocatorias para poder llegar a una definición más exacta del fenómeno electoral. Así en Garay la elección se realiza "por turno entre las caserías radicantes en el pueblo", aunque en la convocatoria se cita "a todos los vecinos"; no puede ser más clara la identificación entre vecindad y propiedad asentada (15).

En parecidos términos se expresan las actas de otros pueblos de Vizcaya. Así un escrito de los Regidores de Bermeo de 1828 habla del "Ayuntamiento general de vecinos" mientras que en la convocatoria del mismo se dice "Que se reúnan en el salón los propietarios de esta villa..." (16).

También resulta interesante analizar los calificativos que acompañan a la palabra vecino como en el caso de Axpe, en que se habla de vecinos arraigados, para denominar a los propietarios (17). Sin embargo las referencias de Zarátamo parecen señalar la utilización del término vecino para referirse a los habitantes de un pueblo en general: "...que todo sujeto que ha de correr en cántaro para fiel regidor en dicha Anteiglesia de Zarátamo, ha de tener la cualidad a más de ser vecino el de tener propiedad en ella..." (18).

Por si no quedase suficientemente claro este concepto está el testimonio del acuerdo adoptado en las Juntas de Guernica el 20-VII-1802 por el que se señalaba que "no asistan a los Ayuntamientos de los Pueblos ni entren en suerte para los oficios de ellos sino los vecinos domiciliados en los mismos pueblos". No deja de ser curiosa la calificación de vecino a un forastero que tiene propiedades en el pueblo (19). El caso de Mallavia es más claro, pues en dicha Anteiglesia la vara de fiel correspondía por turno a los propietarios, quienes podían delegar en su inquilino (20).

A través de los testimonios de los juicios parece observarse que si bien el requisito de la propiedad no era necesario en un principio, la evolución social del XVIII, aumento de población y empobrecimiento del campesinado que pasa a inquilino, hace que se agudice este proceso de exclusión de los inquilinos.

## El sistema electoral

Desde el punto de vista electoral hay que distinguir tres realidades diferentes:

A) Las villas. Son de fundación señorial y desde fines de la Edad Media adoptaron un sistema oligárquico.

La mayoría de las villas, quince, adoptaron un sistema electoral en el cual el Ayuntamiento saliente designaba los candidatos que eran sorteados para saber qué empleo tendrían (Fiel 1.º, 2.º...). En seis casos se sorteaban los vecinos quienes eran nombrados electores y estos designaban los candidatos que debían ser sorteados.

No es necesario insistir en que la vecindad implicaba la propiedad, y en la mayoría de los casos una elevada propiedad. Su sistema electoral es más conocido debido a que se regían mediante ordenanzas.

B) Los Concejos de las Encartaciones. Desarrollaron un sistema especial que fue conservado tras su incorporación al Señorío. Existe entre ellos una mayor variedad de sistemas:

se sortea entre los vecinos y los salidos en suerte designan los candidatos a la alcaldía. Los Regidores son designados por los Regidores salientes.

El Ayuntamiento saliente designa el nuevo equipo.

Los electores son elegidos mediante votación.

Se sortean los electores (variante del primer caso).

El Alcalde es elegido por el Ayuntamiento saliente, los regidores por los vecinos.

También en este grupo hay una marcada tendencia a la creación de la frontera de la propiedad como rasgo distintivo de la condición de vecino.

C) Las Anteiglesias. Son territorios eminentemente rurales. Generalmente se ha caído en el error de considerarlas como un sistema democrático, debido a la pervivencia de los Ayuntamientos generales, concejos, asambleas de cruz parada... Sin embargo el análisis de su funcionamiento nos lleva a pensar que se trata de reuniones meramente informativas, y que el poder decisorio estaba en manos de una oligarquía diferenciada por la propiedad.

Su sistema electoral es muy variado, pero se puede sintetizar en los siguientes casos:

1.º. El Fiel designa sucesor.

2.º. Designación de candidatos que son sorteados.

igual número de candidatos que de cargos.

un nombre que es sorteado con los "ahogados" (nombres que quedaron insaculados y que en algunos casos son los Fieles 2.º y 3.º).

El Fiel designa un candidato al que se une otro elegido por los asistentes.

Se eligen candidatos por barrios y se sortean.

3.º. Sorteo.

4.º. Turno para el cargo de Fiel 1.º.

5.º. Elección de electores.

votación de electores.

los designa el Fiel, quienes junto con él eligen los candidatos.

los designa el Fiel.

sorteo de concurrentes, y los electores eligen los cargos.

sorteo de concurrentes quienes junto con el Fiel eligen candidatos.

sorteo por cuadrillas o barrios quienes designan candidatos.

6.º. Votación.

Por supuesto que no se trata de un sistema monolítico sino que ha ido sufriendo transformaciones. Esta estructura refleja la situación existente a principios del siglo XIX. En Mañaria durante el XVIII se pasó del turno al sorteo; en Guizaburuaga en 1814 se elegía por turno, mientras que en 1836 se habla de que "...se procedió según costumbre a la votación". En 1824, algunos propietarios de Gámiz solicitaron que se nombrasen los cargos mediante votación ya que el sistema de sorteo producía en ocasiones malos resultados.

En las Anteiglesias juega un papel importante la antigua estructura rural, y el sistema electoral evidencia los procesos de formación de las comunidades. Así en Pedernales se nombra Fiel mediante sorteo, y el elegido nombra un representante para el barrio de Canala que se encuentra separado por la ría. En otros casos la situación es de igualdad y encontramos dos fieles con los mismos poderes o que se alternan (Ibarrangelua...). Pero la existencia de un poder bicéfalo no es únicamente signo de la unión de dos elementos sino que en ocasiones evidencia la presencia de la lucha de clases. Así en Amorebieta encontramos un fiel propietario y otro inquilino... (21).

## Los conflictos.

El principal elemento de conflicto de esta sociedad es el empobrecimiento progresivo de los agricultores vascos, aunque las motivaciones aparentes revisten diversas formas.

1.º. — Los comunales.

Los bienes comunales eran un elemento fundamental dentro del mundo del campesinado vasco. Y ciertamente existió un conflicto real en torno a ellos, dada la insistencia con que las ordenanzas de las Anteiglesias y Hermandades vascas los mencionan.

Así las ordenanzas de Arrastarria hablan de la "conservación de los montes"; las de Bernedo del control de talas ilegales, del control de los pastos comunes...

En la consulta realizada en los pueblos de Alava en 1828 se observa que numerosos Ayuntamientos alegan que la supresión de los Concejos provocaría recelos "y que muchas veces habría de suceder que abusasen de su destino..." y que surgirían "discordias que podrían ocurrir siendo gobernado el interés común por particulares..."

La desaparición de los propios es un fenómeno que se desarrolla paralelo a la crisis del siglo XVIII y que se ve agudizado por la guerra contra Francia a principios del XIX. Para sufragar estas deudas los Ayuntamientos se vieron precisados a vender sus propiedades. Así lo señala el ayuntamiento de Pipaón, en la provincia de Alava, en 1828: "Esta villa no obtiene propio ni arbitrio alguno, sólo muchos censos contra sí, y si había algún propio o arbitrio antes de las épocas pasadas hubo que deshacerse de uno y otro... para atender y cubrir las numerosas contribuciones..."

Pero además de este proceso que podríamos calificar de normal, hay un elemento conflictivo como es el de la apropiación indebida. En 1763 se inició un juicio contra el Síndico de Elorrio "sobre saca de compulsas de ventas, permutas y otras enajenaciones hechas en tierras, sitios y montes de dentro y fuera de sus muros en su territorio...". Unos años más tarde, en 1814, los inquilinos de Luno entablaron un juicio contra los propietarios a quienes acusaban de monopolizar el poder municipal. A lo largo del pleito las acusaciones se concretaron más señalando este abuso de los bienes comunales:

"han dispuesto privativamente de todos los fondos públicos, fincas y arbitrios... de diez años a esta parte poco más o menos, en los montes egidos comunes de esta Anteiglesia de Luno titulados Malgorbe, Larrarte y Mendicoarecheta, se han sacado por pie varias partidas y trozos de árboles fructíferos cuyo importe le parece al testigo habrán cobrado los respectivos fieles..." (22).

El mismo testimonio se presentó unos años antes en 1799, cuando el Ayuntamiento de Luno se propuso cambiar el sistema de designación de cargos para salir "al paso (de) algunos abusos que conocida-mente han sido causa de minorarse las rentas de propios y arbitrios".

Este mismo tema se señala en Alava, en donde muchos Ayuntamientos expresan que la alteración del sistema de poder municipal provocaría desequilibrios sobre todo en el tema de los comunales.

Más curiosa resulta la demanda interpuesta por los inquilinos de Galdácano el año 1803, con ocasión de la elección del médico de la Anteiglesia, pues entre los argumentos esgrimidos por su abogado se encuentra el siguiente:

"Los propietarios han tenido la arbitrariedad de disponer de porciones de árboles bravos y fructíferos, cortándolos por pie para materiales y otros aprovechamientos particulares, y distribuyéndolos entre sí; y si a alguno se ha dado permiso para cortar cuatro, con el pretexto que los necesita para reparar su casa o los ha vendido todos o la mayor parte de ellos, sin que el Ayuntamiento hubiese tomado providencia alguna cubriéndose unos a otros, siendo la falta de estos abusos la falta de entrada de los inquilinos a los Ayuntamientos" (23).

## 2.º. — Los inquilinos.

Uno de los principales elementos de disputa es la demanda de los inquilinos que solicitan ser candidatos a los cargos. Este hecho se agudiza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. La razón es muy simple: en este período se produjo un proceso de acumulación de las propiedades y un aumento de la población. Ello unido al sistema de herencias del País Vasco en que el primer hijo pasa a ser el dueño de toda la hacienda, creaba un clima de tensión social.

Así se expresaba el abogado de los inquilinos de Rigoitia en 1831: "...en Rigoitia sucede no pocas veces que el hijo de un propietario quede reducido al estado de colono y mero arrendatario... siendo hijos de una misma familia y que sólo la desgracia de haber querido dejar el Padre sus bienes raíces a uno de los hijos..." (24).

El temor de los inquilinos era que los propietarios utilizaban el poder en beneficio exclusivo, impidiendo a los colonos la utilización de los bienes comunales. Los razonamientos de los propietarios para justificar que los colonos no tuviesen acceso a los cargos eran:

sólo tiene derecho a voto quien contribuye de forma entera.

la propiedad es un requisito imprescindible porque el colono puede marcharse del pueblo al no estar atado a la tierra. Por ello sólo se les admite en el caso de que haya pocos propietarios en el pueblo.

los regidores adelantan dinero en ocasiones y ello no lo puede hacer el inquilino.

Frente a este razonamiento los inquilinos argumentaban que también ellos contribuían; que propiedad no es sinónimo de aptitud y que durante la Guerra de Independencia adelantaron y pagaron parte de las contribuciones.

### 3.º. — Las oligarquías.

La presencia mayoritaria del sistema de cooptación originaba necesariamente la formación de oligarquías cuyos miembros se sucedían en los cargos. Existen denuncias de algunos vecinos sobre la formación de grupos de presión que impiden a los demás acceder a los puestos honoríficos.

El análisis de las listas de los cargos permite establecer familias políticas, y la escasa variación de los nombres de los responsables, quienes durante los períodos de obligada ausencia, los "huecos", solían pasar a desempeñar otros cargos (Depositarios, Síndico, mayordomo de fábrica...). En la Anteiglesia de Zarátamo, entre 1791 y 1802, 39 cargos se repartieron entre 19 personas (25).

Más claro resulta el testimonio de algunos vecinos de la villa de Munguía quienes en 1808 denunciaron que "hay una coligación y partido formado, para que los empleos de Alcalde y demás oficios de justicia estén reconcentrados en él, de modo que estos partidarios y ningún otro pueda ejercerlos" (26). El mismo testimonio encontramos en 1832 en Rigoitia, en donde se señala que unos pocos propietarios monopolizaban el Ayuntamiento y que son muy pocos los que acceden a los cargos (27).

A través de los testimonios de los pueblos parece que el sistema electoral había evolucionado desde el sorteo o el turno a la designación.

### 4.º. — Las coacciones.

Resulta más que evidente que el caciquismo no es un invento del régimen de la Restauración. La coacción es un elemento natural en una sociedad en que las condiciones democráticas no están garantizadas. Existen testimonios acerca de este hecho. Así en un juicio del concejo de Sopuerta en 1827 se señala que uno de los electores "...aturdido llano como un pobre labrador..." cambió el voto presionado por el Alcalde (28).

Pero las coacciones revisten múltiples facetas, como la de los propietarios sobre los inquilinos que pleitean contra ellos en solicitud de derecho de voto, a fin de que se retirasen de la querrela (29).

### 5.º. — Eliminación de enemigos personales o políticos.

El sistema electoral permitía fácilmente la eliminación de los opositores, inhabilitándolos para la práctica electoral. Un medio muy simple podía ser obligarle a entablar juicio contra la corporación. Pero quizá el sistema más usado era que el Síndico, responsable de la legalidad de la actuación durante el proceso electoral, declarase que el candidato incurría en alguna de las incompatibilidades descritas por la ley. El recurso, que solía durar más de un año, hacía que el rechazado no pudiese asumir el cargo.

Resulta difícil pensar en otra razón para juicios como el entablado por Domingo Gregorio de Beteluri y Joseph Joaquín de Echezarreta contra Nicolás Ventura de Eguía en 1788, si no tenemos en cuenta que diez años antes los mismos habían pleiteado entre sí por causa del aprovechamiento de los bosques comunales para sus ferreñas.

Una situación similar se produjo en Baracaldo en 1828 cuando uno de los Regidores propuso tres nombres, uno de los cuales fue protestado en razón de que era deudor del Ayuntamiento. A pesar de que se demostró que tal imputación era falsa, se le excluyó de la lista de "boqueados" (30). A veces se exigía que la persona que protestaba el nombramiento demostrase documentalmente su afirmación, cosa que resultaba harto difícil. Así Antonio de Garro vio desestimada su protesta contra Francisco de Alcorta, en las elecciones de Durango en 1829, "por ser sobrino carnal de Sebastián de Vildósola vecino de esta villa, otro de los electores presentes en el acto, y hallarse éste comprendido en las obligaciones de abastos de vinos de la misma..." (31).

Los sucesos acaecidos en Francia a partir de 1789, Revolución Francesa, marcan un nuevo elemento de conflicto en el tema electoral. En los nombramientos empieza a hablarse de la necesidad de demostrar

buena conducta desde una perspectiva religioso-moral. En 1798 uno de los testigos presentados en el pleito de Cenarruza señalaba: "...que al referido Basterrechea le tiene por perturbador de la Santa Religión por cuanto no suele pagar diezmos y primicias como corresponde al uso y costumbre de este Pueblo..." (32). Religión y política formaban un todo en la mentalidad del Antiguo Régimen y más en unos momentos en que las bases del sistema fundamentado en el Altar y el Trono se hallaban en crisis más allá de los Pirineos.

Los sucesos de 1820-1823 motivaron el inicio de un nuevo período de represión política y en consecuencia de control de los cargos públicos. En el juicio entablado a causa de las elecciones de Sopuerta para el año 1831 se argumentaba contra Domingo Eulogio de la Torre y otros que "las reales órdenes recientes de los años últimos ordenan y mandan que las personas que hayan de obtener los citados cargos y empleos, sean exentos de mala nota moral y política..." (33).

#### 6.º. — La obligación de residencia.

Uno de los elementos de conflicto era la residencia de los "vecinos", que iban a ocupar los cargos. Hay varios juicios sobre dicho tema e incluso el problema fue lo suficientemente importante como para que las Juntas Generales de Vizcaya tratasen el asunto que después fue refrendado por una Real Provisión de 1804.

Las Juntas Generales reunidas en Guernica el 20-VII-1802 consideraron "que es útil y conforme a derecho el que no asistan a los Ayuntamientos, ni entren en suerte para los oficios de los Pueblos, sino solamente los vecinos domiciliados en ellos" (34). Las protestas de algunos de los apoderados evidencian la raíz del problema. Protestaron los de Bilbao y Mariano Josef de Urquijo que acudía en representación de la anteiglesia de San Esteban de Echebarri. Como se puede observar el principal problema era que algunos propietarios residían en Bilbao, desde donde pretendían ejercer su poder en las Anteiglesias vecinas. Tal es el motivo de algunos de los juicios promovidos en la de Abarádo.

Sin duda este hecho evidencia la presencia de dos fenómenos interconectados. Por una parte la concentración de los terrenos en manos de la burguesía bilbaína en franca expansión, tanto por el sistema de comprar como a través de los mecanismos de crédito. El segundo hecho que motiva este fenómeno es el traslado de los grandes propietarios hacia la ciudad o hacia centros mayores desde los núcleos rurales.

Sin embargo no siempre se cumplía este precepto pues en la anteiglesia de Mallavia el cargo de fiel se ejercía por turno entre los propietarios y en caso de que éste viviera fuera podía delegar en su inquilino.

#### 7.º. — El incumplimiento de las normas.

El sistema electoral vasco parecía pensado para evitar la perpetuación en los cargos y que de esta forma se consolidasen vicios de poder. El llamado "hueco" implicaba que una persona debía dejar transcurrir 2 ó 3 años antes de ocupar el cargo nuevamente. Esta norma afectaba también a los familiares, pero las protestas de algunos juicios indicaban que no siempre se cumplía este requisito. El testimonio de Orduña en 1828 es bien elocuente:

"...que el Regidor Decano del presente año D. Manuel Eguiluz se halla casado con una hermana de D. José de Galarza que fue Síndico Procurador general en el año último; que el Regidor segundo de este año D. Ramón de Goyri es hermano de D. Juan Antonio de Goyri, que fue Alcalde en el anterior; que el primer Diputado del común D. Valerio de Samaniego está casado con una hermana de la mujer del tesorero D. Manuel de Yarritu, que sigue desempeñando este empleo desde el año de ochocientos diez y nueve; que el primer Síndico Procurador general D. Ramón de Beraza es socio de la casa de Comisiones de este Real Aduana en que también lo es el expresado D. Juan A. de Goyri" (35).

El mismo año el ayuntamiento de Mallavia presentaba un escrito en parecidos términos: "y si no se opuso al nombramiento de Mayordomo hecho en José de Urquía por un cuñado suyo, así como no se opuso al de Regidor que en su padre hizo el suyo (cuñado)..." (36).

#### 8.º. — Pérdida de atractivo de los cargos.

La mejor evidencia de que los llamados cargos honoríficos comportaban servidumbres excesivas y eran una fuente de conflictos nos lo da el rechazo a desempeñarlos que se observa en numerosas poblaciones. No se trata de un fenómeno exclusivo del País Vasco sino que supone un hecho más general (37).

Los testimonios referidos al País Vasco son bastante abundantes. El Ayuntamiento de Fuenterrabía, enfrentado a una grave crisis en 1831 propuso que se desposeyese del derecho de vecino concejante a los que no acepten el cargo "por razones o motivos de conveniencia personal..." (38). Las ordenanzas de Abando preveían una multa de 50 ducados a los que se nieguen a aceptar dichos oficios (39). Más curiosa resulta la alegación de impedimentos para ser considerado exento del cargo (40).

Pero el testimonio más claro de la gravedad del "peso de la púrpura" nos lo da la declaración de uno de los testigos del juicio sobre elecciones en Rigoitia en 1831: "...que el declarante por eximirse del cargo de Alcalde que fue en el año último ofreció alguna cantidad de reales pero que no le fue admitida" (41).

La guerra carlista llevó al extremo esta actitud hasta el punto de que la Diputación de Vizcaya presentó al Rey D. Carlos una exposición en la que señalaba: "...algunos parece tratan de ausentarse de sus Pueblos a pretexto de remates que han causado fuera de ellos y aún sin tal motivo, otros se han constituido fiadores mancomunados insolidados de los rematantes de sus Pueblos y todos con el objeto de apartarse de dichos empleos" (42).

## Tensiones con el poder central.

La cuestión del poder municipal no sólo planteaba problemas de tipo interno dentro de la Provincia, sino que también fue la causa de enfrentamientos con la Corona durante los años en que ésta trató de limitar las facultades de los territorios forales. Junto a esta motivación cabe señalar también el deseo del Monarca de controlar más estrechamente los diferentes poderes a fin de evitar cualquier resquicio que pudiera permitir la entrada de aires revolucionarios.

Una Real Cédula de 17-X-1824 establecía que "con el fin de que desaparezca para siempre del suelo español hasta la más remota idea de que la Soberanía reside en otro que en mi Real Persona... (y) que las elecciones de Justicia y Ayuntamientos sean uniformes en todo el Reino, evitándose lo que tenga tendencia a la popularidad, las corporaciones locales debían enviar ternas para que las Audiencias o Chancillerías, tras los oportunos informes "sobre las circunstancias y conducta moral y política de los propuestos, su idoneidad, opinión pública que gocen..." les expidan los títulos correspondientes (43).

Esta normativa produjo una fuerte respuesta por parte de las Diputaciones en las que se puede ver claramente cuáles eran sus intereses y sus ideas sobre la organización política de su territorio. En un principio la Diputación alavesa señaló que dicha norma "cree no se opone a los Fueros", mientras que la de Guipúzcoa parecía mostrarse expectante y quería conocer la opinión de los vizcainos.

Reunido el Regimiento general el 6-XI-1824 se acordó "se represente a S. M. con las fundadas razones que asisten al Señorío a fin de que se digne declarar que Vizcaya cumple con remitir a su Diputación General las propuestas". La exposición elevada por la Diputación de Guipúzcoa nos ilustra sobre el verdadero temor que inspiraba la nueva normativa:

"Debiendo componerse la Diputación ordinaria que despacha los asuntos de la Provincia entre Junta y Junta del Diputado general en ejercicio, su adjunto y los dos primeros capitulares del Pueblo de su residencia se trastornaría en su principal cimiento la representación foral de la Provincia con la intervención de los dos capitulares que hayan adquirido estos destinos por títulos que no emanen de la hermandad y así la subordinación de los Ayuntamientos respecto a la Diputación sufriría mucho teniendo aquellos nombramientos y títulos expedidos por la Real Chancillería de Valladolid creyéndose en cierta manera independientes de la Provincia..." (44).

A pesar de esta exposición, una real orden de 2-I-1825 señalaba "que por ahora se observe en las Provincias Vascongadas lo dispuesto en la citada Real Cédula...". A fines de enero las Diputaciones elevaron nuevas exposiciones al Rey señalando que la disposición entraba en contradicción con los Fueros. El escrito de los gobernantes vizcainos insistía en varios hechos. Por una parte señalaba que en Vizcaya jamás ha existido "popularidad" en las elecciones, hecho que se identifica con los principios emanados del Código gaditano; por otra insiste en que la nueva situación "vendría a cambiar esencialmente el carác-



ter político de los representantes de Vizcaya en sus Juntas generales”.

Una nueva exposición de las tres Diputaciones recogía junto a las argumentaciones esgrimidas hasta el momento nuevos razonamientos que no dejan de sorprender y por tanto de clarificar sobre el verdadero sentido de la oposición que se hacía a la ley:

“Aún cuando fuera dado prescindir de estas importantísimas consideraciones, siempre sería atendible el trastorno absoluto que causaría en el régimen municipal administrativo de aquellos Pueblos, la innovación que comprende la Real Cédula expresada. Destituídos por ella los propietarios de la intervención que actualmente ejercen en las elecciones, y para censurar la conducta de los elegidos, faltaría el freno saludable, que conteniendo aún a los díscolos, en los límites del deber, mantiene el orden y la economía, sin los cuales nada sería un País que tan poca parte ha tenido en los dones gratuitos de la naturaleza” (45).

El 7 de diciembre de 1825 el Rey accedió a la petición de las Diputaciones en atención “a la antigua constante fidelidad y utilísimos servicios de estas provincias Vascongadas...”. Por este acuerdo real se permitía que fuesen ellas y no las Audiencias quienes entendiesen de la designación de cargos de acuerdo con las ternas propuestas por los Ayuntamientos. A partir de ese momento las Diputaciones iniciaron una nueva batalla para lograr que se volviese a la situación inicial.

Los guipuzcoanos, reunidos el 22-I-1825, acordaron aceptar interinamente la disposición, encargando a la Diputación ordinaria “que practique las diligencias más eficaces para obtener por medio de sus sumisas y enérgicas representaciones de la justificación de S. M. la conservación de la forma de elecciones que hasta ahora ha regido...”. Pero incluso esta actitud presentaba problemas, pues consideraban que les era difícil cumplir con lo ordenado por el Rey ya “que hay poco número de Concejantes para llenar las ternas que la misma previene, y que por esta razón se verían embarazados los Pueblos por la imposibilidad de su exacta observancia”.

Hasta abril no se produjo la primera exposición al Rey solicitando la vuelta al sistema anterior. En ella los Diputados Vizcaínos advertían sobre el peligro que podía implicar cualquier modificación del sistema vigente: “Lejos de fomentar ni aún indirectamente el espíritu de novedad, y de una imaginaria y funesta perfectabilidad, es muy necesario el desengañar prácticamente a todos de que nada absolutamente nada se piensa innovar”. Además consideraba un sistema viciado la utilización de informantes que podían engañar a los Tribunales.

La iniciativa vizcaína cogió desprevenidas a las otras Diputaciones que consideraban que “hubiera sido mejor el promover una nueva súplica por las tres...”. Por ello en mayo, Alava y Guipúzcoa enviaron sendas representaciones a Fernando VII. Los argumentos alaveses incidían en la necesidad de no producir alteraciones en la costumbre, y la posibilidad de que los informadores no tuviesen buenas fuentes o antepusiesen intereses particulares.

Los guipuzcoanos iniciaban su escrito señalando el hecho diferencial que hace “que una ley útil a ciertas Provincias puede ser muy perjudicial a otra”. Toda su argumentación se basaba en el hecho de que la medida socavaba el sistema foral al hacer depender los nombramientos de autoridades ajenas a la Provincia.

Ante estas alegaciones el Fiscal de la Chancillería señaló que era necesario acabar con las vaguedades e indicar claramente cuáles eran las leyes que conculcaban con semejante propuesta. Es necesario inscribir esta actitud dentro de la polémica generada desde principio de siglo sobre el régimen foral.

La evolución de la Monarquía condicionó un nuevo episodio de crisis en las relaciones forales. Tras los sucesos de 1827 en que las fuerzas absolutistas habían intentado “rectificar” la marcha política del país, en Barcelona se produjo un nuevo incidente, al descubrirse una conspiración de signo liberal. Para evitar nuevos sobresaltos, el Rey acordó nombrar regidores perpetuos en la Corona de Aragón y que se consultase al Consejo de Castilla sobre la conveniencia de “hacer extensiva esta providencia a los demás del Reyno” (46). La Chancillería consultó la medida a los Ayuntamientos de las capitales.

Las respuestas de las Diputaciones contenían una oposición total a la propuesta. Los Vizcaínos se negaban a admitir la medida de forma escueta, por considerarla contraria a las leyes forales. Los escritos de alaveses y guipuzcoanos resultaban más prolivos.

La Diputación de Guipúzcoa, tras señalar que la medida era incompatible con el Fuero, indicaba a continuación los inconvenientes de nombrar cargos perpetuos por el “justo temor del abuso, a que insensible-

mente propende el corazón humano, cuando se apodera del mando...". Además dicha medida provocaría un efecto completamente contrario al deseado, pues engendraría gran descontento y división en los pueblos; haría aumentar el gasto y "debiendo estos Regidores perpetuos cuidar de la hacienda de los concejos, y productos de Propios y arbitrios, sería muy temible que en muchos Pueblos la perpetuidad de sus oficios se alentase y sugiriese facilidades y medios para defraudar el patrimonio público" (47). Como casi siempre la exposición finalizaba con una clara amenaza: "V. A. sabe mejor que yo que las municipalidades han hecho siempre en las convulsiones políticas una fuerza muy importante; que muchas veces han roto ellas el equilibrio de los partidos y no siempre en favor de los Tronos".

La corporación alavesa hacía hincapié en la necesidad de evitar excisiones en los pueblos dado el equilibrio existente entre agricultores y ganaderos y en el carácter elitista de su sistema electoral.

### **La política restrictiva: el caso alavés.**

El miedo al liberalismo que identificaban con la multitud y con las grandes masas populares, el temor a que en las reuniones multitudinarias se produjeran motines, movió a los políticos del momento a tratar de eliminar la excesiva "popularidad".

La Junta general de 25 de noviembre de 1827 estudió una propuesta de varios procuradores en la que se solicitaba la supresión de los Concejos que "ofrece inconvenientes gravísimos en las poblaciones numerosas, porque estando en la conducta regular de los hombres prudentes y moderados el guardar circunspección y tener una voz más remisa en los debates acalorados, triunfan generalmente en ellos los genios más atrevidos..." (48). Como alternativa se proponía el sistema navarro en que se habían constituido ayuntamientos particulares con las personas que habían desempeñado los cargos en los últimos años.

La exposición dirigida al Rey, que acompañaba el traslado de la petición a la Junta y su acuerdo, estaba firmada por Valentín de Verástegui. Resulta un documento altamente ilustrador de la mentalidad del Diputado general y de un determinado sector de la sociedad alavesa que posteriormente se identificaría con el movimiento carlista. Volvía a insistir en los argumentos de que la multitud era incompatible con la decisión acertada: "el influjo de la tenacidad, del interés audaz de ciertos individuos y otras pasiones que con la expresión resuelta de la vehemencia hacen callar las reflexiones prudentes y juiciosas de la moderación y llevan en pos de sí los ánimos poco perspicaces".

No faltaba el razonamiento paternalista sobre la pérdida de tiempo que ello implicaba para las clases modestas: "al paso que distraen al vecindario de sus labores más que a aclarar y dirigir conducen a entorpecer y confundir la marcha de la administración". Obviamente la solución era la creación de "juntas especiales... pues por este medio se reuniría lo más florido, prudente y escogido de las poblaciones con una proporción que evitase a un mismo tiempo los manejos sospechosos del corto número y el escollo igualmente pernicioso de las pasiones impetuosas de la multitud..."

Resulta muy interesante la respuesta del Consejo de Castilla que en su informe señalaba que antes de tomar cualquier decisión era necesaria "la reunión de todos los vecinos de las Hermandades que se componen de diversos pueblos, y de aquellos que pasan de veinte vecinos y se reúnen en Concejos generales para que traten y ventilen el particular".

La respuesta de los pueblos fue mayoritariamente contraria a la supresión: no llegaba a un 30% el número de los núcleos de población que apoyaron la propuesta. Los razonamientos de los pueblos para oponerse a la variación del sistema eran los siguientes:

toda innovación es peligrosa porque no se sabe cómo pueden evolucionar las cosas.

rompería el equilibrio ganado/agricultura.

"...darían recelos a sus convecinos, siempre serían censurados por éstos y muchas veces habría de suceder que abusasen de su destino".

los elegidos querían cobrar.

el Concejo es muy útil para tratar de evitar los destrozos en los campos.

los bienes públicos sólo los puede cuidar "el mismo público".

En estos planteamientos se observa una clara reticencia a la creación de "funcionarios" que implicaría un aumento del gasto; pero el problema principal era el temor a que el abuso conllevara la desaparición del patrimonio municipal.

Las corporaciones que solicitaban la supresión repetían prácticamente los mismos argumentos que se

habían señalado en la propuesta debatida en las Juntas.

A pesar de la opinión de los pueblos el Fiscal del Consejo encargado de elaborar la propuesta que debía ser debatida por el pleno de Consejeros señalaba que se debía aprobar la supresión de los Concejos generales. Resultaba curioso que dicho funcionario argumentase que las razones que iban en contra de la supresión no se apoyaban en otra cosa "que la costumbre observada". El expediente parece que no se resolvió pues la última anotación señalaba "sin resolver en diciembre de 1830".

La petición aprobada por las Juntas de Alava fue realizada dos años después de que la Diputación hubiese escrito al Rey con motivo de las modificaciones que se pretendían introducir en el sistema de designación de cargos:

"Mas al considerar que apenas hay un pueblo en todo el distrito alavés que no esté mancomunado con otros muchos en sus campos, aguas y montes: al ver que todos tienen determinado su aprovechamiento de un modo sumamente accesible al abuso; al reflexionar que en medio del equilibrio con que está combinado según el método antiguo el influjo de los Ayuntamientos respecto de los diferentes pueblos de que se compone cada uno, son inevitables frecuentes disputas, contestaciones y recursos sobre la parte de aprovechamiento común que a cada vecindario compete; no puede menos de mirar con cierta especie de sobresalto el que con las propuestas y nombramientos nuevos se desnivele la protección que cada pueblo conserva ahora en el cuerpo municipal.

Los Ayuntamientos con sus prudentes y juiciosos acuerdos están evitando diariamente las demasías a que naturalmente propende el interés individual; el acierto e imparcialidad de sus providencias dimana principalmente de que los capitulares corresponden a los diferentes concejos de toda la comunidad, y cada uno sostiene los derechos de su pueblo respectivo al paso que respeta los de los demás por la defensa que encuentran en sus compañeros... evitando desavenencias y litigios, y haciendo que aquello mismo que había de ser origen de disturbio, se convierta en principio de una provechosa emulación..." (49).

Resulta difícil explicar este hecho si no tenemos en cuenta los acontecimientos políticos y los intentos de crear en el País Vasco una estructura de resistencia absolutista frente a las posibles innovaciones del sistema.

## **Datos para una propuesta de análisis.**

Dado que se trata de un curso de historia local enfocado sobre todo a presentar propuestas que sean operativas de cara a un trabajo de investigación histórica dentro de un marco local, creo que lo más correcto es finalizar esta exposición con una propuesta concreta.

El primer objetivo debe ser localizar las Ordenanzas locales, que no siempre contaban con la aprobación real y que por ello para localizarlas es necesario acudir a los Archivos municipales, ya que una pragmática de 3-IX-1501 señalaba la obligación de "formación de libros en todos los pueblos para sentar sus ordenanzas, privilegios, escrituras y sentencias a su favor".

Una vez halladas es necesario analizar su contenido, midiendo la extensión concedida a cada uno de los temas tratados, su estructuración... En el caso de que existan varias Ordenanzas resulta interesante hacer un análisis comparativo tanto de los temas tratados como de la amplitud concedida a los mismos. Es evidente que una mayor extensión en el articulado dedicado al sistema electoral puede implicar la necesidad de contrarrestar posibles conflictos.

El segundo aspecto a estudiar es el análisis de las "familias" de ordenanzas. No todos los pueblos crean su propia reglamentación, sino que en muchos casos adoptan la de algún municipio cercano de forma total o introduciendo las modificaciones necesarias.

Las Ordenanzas nos permitirán conocer los cargos existentes en cada municipio y sus funciones, para lo cual es necesario completar dicha información con las Actas municipales que posibilitan saber la incidencia de las leyes emanadas de la autoridad real en los territorios forales.

La fuente más interesante es el estudio del Libro de elecciones. Estas solían realizarse generalmente en los últimos días del año y deben estar recogidas en el Libro de Actas o en el de Elecciones. Esta documentación es la que nos permite conocer gran parte de los datos relativos al poder municipal.

El primer elemento que se debe verificar es el grado de aplicación de la Ordenanza. A continuación es

necesario analizar los nombres citados en el Acta. Suele ser frecuente que se anoten determinados nombres y que se finalice con una fórmula similar a ésta "y otros vecinos que son la mayor y más sana parte...". Los citados suelen ser las personas de más relevancia social, situación que se deriva de su edad, jerarquía, importancia económica o de haber ocupado cargos con anterioridad.

Dentro del mecanismo electoral el análisis se debe centrar en los nombres de los cargos y sobre todo de los propuestos para ocuparlos al año siguiente. La relación entre dichos nombres nos permitirá conocer las posibles redes de poder e influencia. Resulta también importante observar si se repiten los nombres de forma indiferente o únicamente dentro de un tipo de cargo (Fiel, depositario, mayordomo...). Ello nos permitiría establecer jerarquías dentro de los cargos, pues a algunos se accede una vez poseídas determinadas cualidades (económicas, de edad, haber ocupado previamente otros oficios...). Establecidos los grupos es imprescindible intentar hallar una norma explicativa de los comportamientos.

Las denuncias por irregularidades no siempre acaban en juicio, ya que lo costoso del procedimiento y su inutilidad (duran más de un año, período de disfrute del cargo) hacen desistir a muchos de entablar la querella.

Por último es necesario completar la información sobre los grupos de poder. Protocolos notariales y contadurías de hipotecas nos permiten saber la posición económica de cada individuo y en algunos casos sus conexiones personales (censos, remates, obligaciones...). Otra información complementaria puede venir de los juicios y de estudio topográfico del municipio. La situación de las tierras, los litigios por lindes, los enlaces familiares forman parte, en muchos casos, de la tradición oral.



# NOTAS

- \* El presente trabajo es fruto de una investigación que estoy realizando sobre la estructura del poder local en el País Vasco durante el Antiguo Régimen.
- (1) Sobre el municipio catalán existe una excelente monografía: TORRAS I RIBE, Josep M. **Els Municipis catalans de l'antic regim 1453-1808** Barcelona 1983. La bibliografía sobre el municipio castellano es también copiosa, pero baste señalar la indicada por el propio Torras en la pág. 55 de su obra.
- (2) Sobre el municipio vasco se puede consultar además de las numerosas historias locales realizadas a principios de este siglo: MADARIAGA ORBEA, Juan José "Municipio y vida municipal vasca de los siglos XVI al XVIII" Hispania n.º 142 (1979) págs. 505-558. La obra de MONREAL CIA, Gregorio **Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (hasta el siglo XVIII)** Bilbao 1974 presenta la limitación de haberse realizado fundamentalmente sobre fuentes editadas. Desde el punto de vista historiográfico es interesante ver CAMPION, Arturo "El Municipio vasco en la Historia" en **Asamblea de Administración municipal vasca**, San Sebastián 1920.
- (3) Sobre la mitología de la democracia vasca no es necesario citar explícitamente ninguna obra pues la bibliografía es muy numerosa. Una visión discordante se puede ver en OTAZU Y LLANA, Alfonso de **El "igualitarismo" vasco: mito y realidad** San Sebastián 1973.
- (4) **Archivo de la Casa de Juntas de Guernica** (ACJG). Elecciones R. 10. Escrito enviado por la Diputación de Vizcaya al Secretario de Gracia y Justicia el 27-XI-1829.
- (5) **ACJG**. Guerras civiles R. 135; Elecciones R. 10.
- (6) **Gaceta oficial** n.º 117 (6-XII-1836) R.D. 1-XII-1836.
- (7) MIÑANO, Sebastián **Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal** (tomo V) Madrid 1826.
- (8) **Archivo de la Excelentísima Diputación de Vizcaya** (AEDV). Corregimiento 103-5.
- (9) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. **Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las frases, o modos de hablar, los proverbios, o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...** (tomo sexto) Madrid 1739.
- (10) ORTIZ DE ZARATE, Ramón. **Compendio foral de la provincia de Alava** Bilbao 1858. Págs. 72-73. También es necesario ver el reciente libro de ABELLA Y GARCIA DE EULATE, Alfonso M.º. **Ordenanzas de buen gobierno de los Concejos de Alava**. Vitoria 1985.
- (11) **Archivo Histórico Nacional** (AHN). Consejos 3943.
- (12) **ACJG**. Elecciones R. 21.
- (13) **ACJG**. Elecciones R. 21.
- (14) **Cuaderno de las leyes y agravios reparados a suplicación de los tres estados del Reino de Navarra**.
- (15) **ACJG**. Elecciones R. 10.
- (16) **Archivo de la Real Chancillería de Valladolid** (ARCHV). Sala de Vizcaya. (Vizcaya) 1678-6.
- (17) **ACJG**. Guerras civiles R. 135; Elecciones R. 10.
- (18) **AEDV**. Corregimiento 681-17.
- (19) **AEDV**. Actas de la Junta General 20-VII-1802.
- (20) **ACJG**. Elecciones R. 22.
- (21) **ACJG**. Elecciones R. 10. A principios del XIX existían en Vizcaya 38 Anteiglesias con dos primeros fieles. En la mayoría de los casos se señalaba que ambos tenían igual autoridad. En Ajánguiz y Amorebieta había un fiel inquilino y otro propietario. En Dima uno ejercía funciones judiciales y el otro gubernativas.
- (22) **AEDV**. Corregimiento 924-5.
- (23) **AEDV**. Corregimiento 628-2.
- (24) **AEDV**. Corregimiento 795-35.
- (25) **AEDV**. Corregimiento 681-17.

- (26) **AEDV.** Corregimiento 1057-4.
- (27) **ACJG.** Elecciones R. 21.
- (28) **ACJG.** Elecciones R. 21.
- (29) **AEDV.** Corregimiento 628-2. En Galdácano algunos inquilinos desistieron de pleitear contra los propietarios. El abogado de los inquilinos dijo que lo hacían "sobornados por aquéllos".
- (30) **ACJG.** Elecciones R. 22.
- (31) **ACJG.** Elecciones R. 23.
- (32) **AEDV.** Corregimiento 300-7.
- (33) **ARCHV.** Vizcaya 3796-8.
- (34) **AEDV.** Junta general de 20-VII-1802.
- (35) **ACJG.** Elecciones R. 22.
- (36) **ACJG.** Elecciones R. 22.
- (37) **TORRAS, Op. cit.** Pág. 357 y ss. señala este fenómeno para el último tercio del siglo XVIII.
- (38) **AHN.** Consejos 3901.
- (39) **AEDV.** Corregimiento 234-2.
- (40) **ACJG.** Guerras civiles 135. En Derio en 1836 uno de los votados "protestó su nombramiento por no tener dadas las cuentas de su último fielato y otros motivos que a su tiempo expondría. **ACJG.** Elecciones R. 22. Miguel A. Inunciaga, escribano de Durango solicitó se le eximiese de ejercer el cargo de Alcalde porque ha sido Síndico procurador general del Señorío en el último bienio, motivo por el que dejó abandonado su cargo de escribano. **AEDV.** Corregimiento 681-17. En Zarátamo como nadie quería ser Depositario (1800) recurrieron al sistema de sorteo.
- (41) **AEDV.** Corregimiento 795-35. Testimonio de Domingo de Madariaga.
- (42) **ACJG.** Guerras civiles R. 221.
- (43) **ACJG.** Elecciones R. 21.
- (44) **ACJG.** Elecciones R. 21. escrito de 12-XI-1824.
- (45) **ACJG.** Elecciones R. 21 s/f. hacia 1825.
- (46) **ACJG.** Elecciones R. 22. Traslado de una Real Orden de 22-X-1828.
- (47) **ACJG.** Elecciones R. 22. Exposición de la Diputación de Guipúzcoa. 21-II-1829.
- (48) **AHN.** Consejos 3777. La propuesta firmada por Simón de Echevarría Elorriaga, Domingo Hortiz de Zárate, Teodoro Manuel Heraso, Nemesio Abalos y Pedro M.º de las Heras se realizó el 24-XI-1827 y fue discutida en la sesión del día siguiente. El 1-III-1828 se elevó al Rey.
- (49) **ACJG.** Elecciones R. 21. Exposición de la Diputación de Alava al Rey con fecha 23-I-1825.